

Partido

Socialista

Obrero

Español



GRUPO POLÍTICO PSOE

DIPUTACION PROVINCIAL TERUEL

## GRUPO SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

### Propuesta de Resolución 1/2018

NOTA: La presente propuesta sustituye a la presentada y registrada por este Grupo Socialista el pasado día 2 de enero de 2018.

#### SOBRE LOS GRAVES SUCESOS ACONTECIDOS EN ALBALATE DEL ARZOBISPO Y ANDORRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017

El grupo Provincial Socialista de la Diputación Provincial de Teruel, al amparo del art. 122 de la Ley 7/1999, de 9 de abril de la Administración Local de Aragón, **traslada al Pleno de la Diputación Provincial de Teruel**, con el fin de que sea debatida y votada, una propuesta de resolución referente a **los graves sucesos acontecidos entre el día 5 y el 14 de diciembre de en la provincia de Teruel (Comarca Andorra-Sierra de Arcos y Comarca Bajo Martín) que acabaron con el asesinato de tres personas (un joven ganadero de Andorra y dos Guardias Civiles) solicitando su tramitación ante el Pleno.**

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todos compartimos que la **seguridad ciudadana** es uno de los elementos claves del Estado, y sobre todo, los propios ciudadanos reconocen, que junto a la sanidad, la educación, las pensiones y la atención a las personas dependientes por los servicios sociales, la **seguridad pública constituye lo que podríamos denominar el quinto pilar de nuestro estado del bienestar.**

La gestión y la garantía de una seguridad pública de calidad en España, casi en su totalidad, depende del Gobierno de España, en especial, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y la colaboración de las Policías Locales en aquellos municipios que cuentan con estas unidades.

Desde el 2011 debemos reconocer, por responder a datos contrastables, que **los recortes llevados a cabo por el Gobierno central en las plantillas de los servicios públicos que articulan el estado de bienestar en nuestro país, han afectado seriamente también a la seguridad pública y, por tanto, al número de policías y guardias civiles.**

Así son los datos, desde 2005 a 2010 (6 años) el Gobierno Socialista de Jose L. Rodríguez Zapatero convocó 24.046 plazas de Policías Nacionales y 20.794 Guardias Civiles, es decir, un total de **44.840 nuevos profesionales de la seguridad pública**; frente a ello desde 2011 hasta 2017 (7 años), por contra el Gobierno de Mariano Rajoy solamente han sido 8.380 de Policía Nacional y 5.001 de Guardias Civiles, es decir un total de **13.381** (teniendo en cuenta por otra parte que de estos 3600 plazas de Guardia Civil y 6071 de Policía Nacional corresponden a las convocatorias de 2016 y 2017 y que, por tanto, ninguno de estos últimos se ha incorporado al servicio activo, pues los de 2016 están en formación en las academias y los de 2017 se encuentran en fase de oposición en estos momentos). En resumen, **desde 2011 a 2017 el Gobierno de España solo ha puesto en servicio efectivo a 1.401 Guardias Civiles y a 2.309 Policías Nacionales –un total de 3.710-.**

El propio Ministerio del Interior reconoce que la Policía ha perdido un 9,9% de su personal y la Guardia Civil un 6,4% desde que gobierna Mariano Rajoy, es decir un total de **12.400** plazas. Los efectivos policiales han caído de 72.457 a 65.287 entre diciembre de 2011 y octubre del año pasado (7.170 plazas sin cubrir). En el caso del Instituto Armado las vacantes son 5.265, tras descender de 82.692 a 77.427 miembros.

La realidad, sin embargo, es que la pérdida puede haber sido mayor (cercana posiblemente a los -20.000 agentes de policía y guardia civil) dado que la reposición no cubre el ritmo de las jubilaciones (a razón de 260 por mes en cada uno de los cuerpos de seguridad)

La conclusión de estos datos es que **se ha dañado enormemente la seguridad pública en España, y cuando hablamos de daño en seguridad pública esto afecta especialmente al mundo rural**, donde como en el resto de los servicios (sanidad, educación y servicios sociales) el sector privado no está presente por no ser negocio.

A esto añadir, que la obligación de las administraciones locales de cumplir con la tasa de reposición de efectivos desde 2013, incluso por debajo del 100%, al amparo de la **Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local** ha llevado a que también el cuerpo de Policías Locales de la seguridad pública se haya visto minorado notablemente en la mayoría de Ayuntamientos que disponían de este servicio.

Esta situación de escasez de efectivos de seguridad pública viene dañando especialmente a la España interior, la llamada "España vacía", aquella a la que en mayor medida afecta el fenómeno de la **DESPOBLACIÓN**, pues en gran parte o casi en su

totalidad la seguridad está atendida por los miembros de la Guardia Civil, es decir, el cuerpo de seguridad con menor tasa de reposición y con peores retribuciones, dicho sea de paso.

En la provincia de Teruel solamente se dispone de Policía Nacional en la capital de la provincia, y de Policía Local en la propia ciudad de Teruel, y las de Alcañiz, Andorra y Calamocha. El número de Guardias Civiles efectivos en plantilla en la provincia ronda los 730, de ellos con plazas ocupadas hay 620, de los que 150 cumplen tareas administrativas, por lo que si restamos a los 14.804 km<sup>2</sup> de la provincia los 440 que corresponden a Teruel ciudad, **cada integrante de la Guardia Civil debe cubrir casi 30,6 km<sup>2</sup>.**

Esta es la situación objetiva de riesgo, miedo e inseguridad que la mayoría de personas y municipios de la provincia de Teruel viven. Pueblos a los que indudablemente, como no es negocio, las empresas de seguridad privadas no hacen acto de presencia. Es la inseguridad que muchos de sus alcaldes/as han venido reclamando con el cierre de cuarteles, con la reducción de servicios y el cierre de los cuarteles existentes en fin de semana. Alcaldes y alcaldesas que reclaman la colocación de cámaras de videovigilancia en sus calles porque los guardias civiles en el mejor de los casos pueden hacer acto de presencia cada dos días....

Este es el drama de la falta de seguridad pública, especialmente cuando escasean los recursos y los medios en el medio rural.

Queremos dejar sentado que lo que ocurrió en el periodo que va desde la tarde del 5 de diciembre a la medianoche del 15 de diciembre en que era detenido en Cantavieja el psicópata asesino y ex militar serbio Norbert Feher, solo tiene que ver con la maldad asesina de esta persona. Sólo él es culpable de los crímenes tan atroces cometidos.

Sin embargo, nuestra obligación de representantes políticos de los ciudadanos, nos obliga a señalar que producido el tiroteo de la tarde del día 5 de diciembre en Albalate del Arzobispo, con el resultado de dos ciudadanos heridos por arma de fuego, hasta la tarde del día 14 en que el mismo asesino acabó con la vida del ganadero José Luis Iranzo y los caballeros guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, todo el Bajo Aragón vivió con angustia, miedo, e inseguridad la posibilidad de que el asesino estuviera en la zona pero no se sabía del dispositivo que las fuerzas de seguridad habían desplegado, ni las autoridades civiles fueron informadas del riesgo, ni se dieron pautas de autoprotección a la población civil, tal y como se ha constatado estos días tras las

contradicciones conocidas posteriormente entre el Ministro Sr. Zoido, el Subdelegado de Teruel y el Delegado del Gobierno en Aragón.

Una vez producida la tragedia, con el triple asesinato de un ciudadano y dos empleados públicos de la seguridad ciudadana, se llevó a cabo el dispositivo especializado para cercar y detener al asesino.

Los habitantes y vecinos de Andorra y Albalate, y por extensión las comarcas del Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos y la del Bajo Aragón vivieron durante 11 días con el miedo y el terror de conocer de la posible existencia de un individuo que amenazaba sus vidas, y no han contado con la seguridad y la tranquilidad, ni con la información suficiente sobre que su propia seguridad estaba garantizada por el Gobierno de todos.

Tampoco los alcaldes y alcaldesas de la zona fueron informados debidamente ni conocían como actuar ante esta situación de extrema gravedad para proteger y garantizar la vida y la integridad física de la población.

**El Grupo Provincial Socialista en la DIPUTACIÓN PROVINCIAL de Teruel somete a votación la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS:**

- 1.- Condenar los asesinatos de José Luis Iranzo, y de los Guardias Civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, ocurridos el día 14 de diciembre en la provincia de Teruel, así como trasladar el más sentido pésame a todos sus familiares, en especial esposas e hijos, padres, amigos y compañeros.**
- 2.- Hacer un reconocimiento explícito de la enorme labor que realizan en nuestro vasto territorio los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, especialmente los guardias civiles presentes en nuestros pueblos, como era la tarea desarrollada por Víctor Romero y Víctor Caballero, labor realizada con escasos recursos y enorme riesgo, prestando y protegiendo la seguridad de todos los aragoneses.**
- 3. Reconocer en el ganadero andorrano José Luis Iranzo, el ejemplo de esos hombres y mujeres comprometidos con nuestra tierra, con nuestros pueblos despoblados, con esa gente joven y formada en nuestros Institutos y en nuestra Universidad que apuesta y se dedica al sector primario en una lucha épica contra la despoblación y que se**

Partido

Socialista

Obrero

Español



GRUPO POLÍTICO PSOE

DIPUTACION PROVINCIAL TERUEL

compromete con la seguridad de sus vecinos, colaborando con los miembros de las fuerzas de seguridad del estado.

4.- Solicitar del **Gobierno de España la cobertura de todas las plazas vacantes en Teruel y provincia de Guardias Civiles y de Policías Nacionales**, con el fin de garantizar una seguridad pública de calidad para todos nuestros ciudadanos. Especialmente esta exigencia debe llevar un plus de refuerzo a favor de aquellas Comandancias que atienden, como la de Teruel, al mundo rural de nuestros pueblos escasamente habitados.

5. – Solicitar del Gobierno de España el que en **la revisión de las plantillas de policías nacionales y guardias civiles se tengan en cuenta los criterios de extensión territorial y de grado de despoblación, con el fin de incrementar el número de miembros de estos cuerpos en provincias como Teruel**, y en especial el número de guardias civiles pertenecientes a los equipos ROCA y de seguridad ciudadana.

6.- Solicitar del Gobierno de España **mayor inversión en recursos materiales** y dotaciones personales (vehículos, chalecos anti\_balas, armamento...) a disposición de los miembros y cuerpos de seguridad del estado en el ámbito rural.

7.- Solicitar del Gobierno de España y del Ministerio del Interior, en particular, **toda la información oficial y verdadera**, que no esté sometida a secreto de sumario, tanto sobre los trágicos hechos acontecidos en Albalate del Arzobispo y Andorra, como sobre el dispositivo planificado en los días que van del 5 al 14 de diciembre con el fin de capturar al peligroso delincuente. Información a la que tenemos derecho todos los ciudadanos, pero especialmente los familiares de las víctimas en su proceso de duelo.

Teruel, 25 de enero de 2018  
El Presidente del Grupo Socialista DPT

José Ramón Morro García

ILMO. SR. PRESIDENTE  
EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL

